

## Acerca del plan Colombia<sup>1</sup>

Malcom Deas

*A la memoria de Jesús Antonio Bejarano,  
muerto por asesinos desconocidos  
cuando se dirigía a clase*

### Resumen

Este ensayo discute y argumenta a favor de una tesis poco defendida en Colombia: la pertinencia de la ayuda militar de los Estados Unidos (y europea, si la hubiera) al gobierno colombiano. Lo hace a partir de un análisis de los elementos básicos del conflicto armado colombiano y de una crítica de los argumentos tradicionales en torno a su génesis y desarrollo. Propone, en especial, una interpretación de las acciones y perspectivas de la guerrilla y de los paramilitares que difiere, de manera decisiva, del grueso de las interpretaciones tradicionales. Demuestra que “darle una oportunidad a la guerra” no es un chiste cínico, sino una alternativa analítica y estratégica respetable, de cuyo éxito depende, en buena medida, el éxito de las negociaciones de paz.

### Abstract

The essay presents the case in defense of a concept that has little support in Colombia: namely the continuing military support to this country within the framework of Plan Colombia. The analysis begins with a look at the basic elements of the armed conflict and presents a critique of the traditional arguments usually given in relation to the genesis and continuing developments in the conflict. The essay proposes a different interpretation with respect to the motives of the guerrilla movement and of their right wing opponents in the paramilitary groups. The idea that the military assistance provides an ‘opportunity for warfare’ is considered a very cynical way to look at the present situation. Rather the military assistance is seen within the framework of an alternative approach. The success (or failure) of the military assistance will determine in large degree the outcome of the present peace negotiations.

**Palabras claves:** Colombia, Plan Colombia, economía de la droga, violencia y conflicto.

---

<sup>1</sup> London Review of Books. Volumen 23 número 7 Londres, abril 5 de 2001, Traducción de Boris Salazar profesor Departamento de Economía, Universidad del Valle.

Mucha más gente sigue muriendo en Colombia que en los enfrentamientos en el Medio Oriente entre israelíes y palestinos, y es el tiempo preciso para que se le preste más atención internacional. Este país se encuentra en el Hemisferio Norte y desde su capital se puede acceder con facilidad a Miami. Es grande y poblado -con una población de más de cuarenta millones es el tercer país más poblado de Latinoamérica después de Brasil y México-, pero también terriblemente complicado: geográfica, racial, económica, política, militar y diplomáticamente; y los editores de los periódicos tienen poco tiempo y cada vez menos dinero o espacio para gastarlo en dar cuenta del escenario o lidiar con precisiones. Por lo tanto dejan a Colombia tranquila, con excepción del pequeño colorido ocasional que ofrecen las drogas y las guerrillas.

Nuestro compromiso moral o intelectual con el conflicto externo es, también, como lo plantea Michael Ignatieff, “notoriamente selectivo y parcial”. Colombia no parece ser estratégica. En verdad, durante la mayor parte de su historia independiente no lo ha sido. Una nota desdeñosa de la Foreign Office acerca de un despacho enviado desde Bogotá que describía una pequeña demostración de fuerza para dirimir una disputa menor, subrayaba que cualquier enredo con “la gran república de Colombia” sería una pérdida de tiempo y de dinero, absurdo hasta el punto de la hilaridad. Colombia se volvió todavía menos estratégica con la pérdida de Panamá en 1903. Hoy en día, aún Panamá no es muy estratégica.

Tampoco Colombia parece ser lo suficientemente occidental como para incitar algún sentido de solidaridad. Seguimos, para no usar una palabra tan fuerte como estudiamos, los eventos en los Balcanes, en parte porque los Balcanes tienen casas de ópera, estaciones de ferrocarril conectadas, a través de trenes con facilidades para dormir, a los más altos centros de la civilización, Viena, París y Berlín, y pistolas Luger con sellos de las dos águilas, y países que están solicitando ahora su entrada a la Unión Europea. Que su futuro democrático debería ser la preocupación activa y costosa de los Estados es tomado como un hecho. Colombia tiene una tradición democrática más larga y más fuerte que la de cualquier Estado balcánico, y es occidental en gran parte de su cultura y de sus instituciones, aunque hace mucho tiempo se separó de España, a la que todavía se nos hace difícil reconocer como una de las fuentes de la cultura occidental.

Al conflicto colombiano le hace falta una causa obvia: no hay lucha de liberación nacional, ni separatismo ni irredentismo. Aunque sus vecinos son en ocasiones aprehensivos, no participan de sus problemas. Incluso el presidente Hugo Chávez de Venezuela (sobre el cual Richard Gott escribió para el LRB<sup>2</sup>) no ha hecho más que exhibir una actitud populista ocasional. Pocos países en los dos últimos siglos se han involucrado tan poco como Colombia en las guerras internacionales, lo que puede ser una de las razones por las cuales los colombianos han peleado el uno con el otro, y es en verdad una de las razones para la indiferencia del resto del mundo hacia el país.

---

<sup>2</sup> London Review of Books. El periódico donde se publicó originalmente este artículo

¿Por qué los colombianos pelean tanto entre ellos? En un debate reciente en la House of Lords un orador confesó que sólo había estado dos horas de tránsito en el aeropuerto de Bogotá, pero que aún así era claro para él que la raíz de la violencia del país estaba en la injusticia social. Este es un punto de vista común (y que no tiene nada que ver con el aeropuerto) pero que está siendo cuestionado en forma creciente. En un artículo reciente, Paul Collier, el director de investigación del Banco Mundial, revisó un número grande de conflictos y de guerras civiles alrededor del mundo, y examinó los factores comunes que podrían dar cuenta de su persistencia. Encontró que la pobreza y la desigualdad eran estadísticamente insignificantes. Las correlaciones importantes incluían un flujo de exportaciones primarias sobre el que los rebeldes podían exigir tributación con facilidad, una población joven, relativamente poco educada, y por lo tanto fácil de reclutar, un territorio grande, un patrón de localización disperso y una historia previa de conflicto. Colombia los tiene todos. La exportación que se puede someter a tributación es, en primer lugar, aunque no exclusivamente, las drogas; el petróleo, el carbón, el oro y el banano figuran en los esquemas de tributación de rebeldes y paramilitares. Estos flujos de recursos son mucho más fáciles de detectar que de reducir o controlar. Los colombianos han notado que no es en las partes más pobres del país donde la guerrilla y los paramilitares florecen. La teoría local está familiarizada con la relación entre bonanzas, migración y subversión y toma en cuenta pobreza y desigualdad (las bonanzas son rara vez igualitarias), pero un elemento necesario para explotar tales situaciones para el objetivo de la lucha armada es una organización decidida a perseguir ese objetivo.

¿Pero no deberían esas organizaciones caracterizarse como guerrillas izquierdistas peleando por la justicia social y como paramilitares de derecha peleando contra ella? Sólo hasta cierto punto. La más grande organización guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tiene su origen en uno de los contendientes más agrarios de los conflictos entre los liberales y conservadores del país en los cuarenta y en los cincuenta: campesinos que habían llegado bajo el ala del pequeño partido comunista pro Moscú. Las FARC le dieron a ese no muy radical partido las credenciales revolucionarias requeridas en una época de entusiasmo por las guerrillas que siguió al derrocamiento de Batista por Castro. En los últimos cuarenta años se han convertido en una fuerza que está entre los 15.000 y los 20.000 hombres, con una cola de amigos, relaciones y proveedores cuatro o cinco veces ese número. Han multiplicado sistemáticamente el número de sus frentes, usando métodos en los que ganar popularidad e influencia política no son fundamentales. Sus recursos no provienen del campesinado: la línea del liderazgo en lo concerniente a la popularidad, cuando hay que tener una, es que la popularidad puede esperar hasta después de la revolución.

El segundo movimiento guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), empezó conscientemente como un “foco” castrista. Sus cifras son mucho menores que las de las FARC., menos de cinco mil hombres, y no les ha ido muy bien en los

últimos días. Se ha especializado en la extorsión, en la destrucción de la infraestructura petrolera y eléctrica, y en los secuestros. Su asalto al medio ambiente, medido en barriles de petróleo derramado, es equivalente a más de un Exxon Valdez al año durante la última década y media.

En las numerosas encuestas acerca de actitudes populares llevadas a cabo en Colombia la posición de las guerrillas es aún más baja que la de los políticos, y muy por debajo de la del Ejército, que en general llega en segundo lugar después de la Iglesia. Las encuestas son predominantemente urbanas, pero también lo es la población. Hoy la guerrilla alcanza un porcentaje de aprobación de alrededor un 3%. A la evidencia de las encuestas hay que agregar las demostraciones masivas contra la violencia montadas por varias organizaciones cívicas en ciudades a lo largo del país, que casi no son registradas por fuera, y contra las cuales los violentos responden con amenazas a los organizadores. Por esta razón a muchos colombianos no les gusta que su conflicto sea llamado guerra civil, lo que usualmente implica un grado más grande de polarización y de participación popular en un lado o en el otro. Este fue el motivo de un intercambio reciente entre el presidente Pastrana y Chávez, después del cual Chávez se retractó del uso del término. De todas formas, el conflicto colombiano produce regularmente dos o tres mil muertes violentas al año.

Las FARC tienen un incompleto programa de 10 puntos, muy marxista en su tono, que pocos colombianos se molestan en leer, y sabiamente no tratan de llamar demasiado la atención sobre él: esos programas, particularmente en Colombia, atraen de inmediato a los críticos, de forma que hay mucho que decir a favor de mantenerlo en términos vagos. El secretariado de las FARC prefiere proyectarse a sí mismo como el músculo que impondrá la creación de la “nueva” Colombia, sin definir qué es; simplemente emergerá de la voluntad del pueblo, expresada bajo la protección de las FARC. Los reclutas son predominantemente jóvenes del campo y de pueblos pequeños, sin mucha educación o muchas perspectivas, y la mayoría probablemente no están interesados en ninguna reforma agraria futura.

¿Por qué pelean las FARC, entonces? Como regla espontánea, entre más generales y utópicos sean los fines de cualquier organización -justicia social, igualdad- más deben ser interpretados como signo de que la organización quiere seguir peleando. Nadie, en ningún lugar, sabe cómo negociar justicia social e igualdad: tienen que ser reducidos primero a lo concreto y a lo práctico, y un liderazgo guerrillero desprecia, en general, el tener que considerar algo práctico porque conduce a discusión en el seno de organizaciones que son esencialmente autoritarias, y la discusión puede llevar a la división. La gazmoñería y la pedantería insufribles de los líderes guerrilleros no es sólo un rasgo común de su carácter; es también funcional: el liderazgo siempre debe tener la razón. El estilo de negociación de las FARC tiene toda la gracia de la letra menuda en una póliza de seguro, pero está allí, también, con un propósito.

Haciendo una conjetura muy gruesa, lo mínimo por lo que pelean las FARC es por algún tipo de reconocimiento del lugar que han alcanzado en la historia de

este país en cuatro décadas de supervivencia y expansión, y con una parte de poder conmensurable con el que hoy ejercen, aunque ni ellos ni nadie sabe cómo puede ser medido, acordado o garantizado. Hasta que eso se vuelva claro, la cosa más simple, como ocurre con muchas guerrillas, es más de lo mismo, porque eso mantiene la disciplina, la moral y el ingreso. Mucho de lo mismo consiste, por lo común, en ataques a aldeas y pueblos pequeños, usualmente sólo protegidos por puestos de policía: lugares escogidos tan sólo por la dificultad de cualquier respuesta del Gobierno. Estas tomas se han vuelto mucho más destructivos desde que las FARC adoptaron el arma salvadoreña de los cilindros de gas. En ocasiones, operaciones más grandes y riesgosas se han llevado a cabo, concentrando hasta 1000 guerrilleros, pero esto no puede ser repetido con frecuencia y no siempre son exitosas.

Ahora viene el asunto interminable de la supervivencia y la logística. Las guerrillas son, directa e indirectamente, responsables por la mayoría de los secuestros en Colombia, que tiene la tasa más alta de secuestro del mundo, con más de tres mil casos de secuestro oficialmente registrados al año. Esto provee, por sí mismo, una sustancial fuente de ingreso, y es la sanción que incentiva el pago del resto de un rango completo de extorsiones. Es también un obstáculo a cualquier cese al fuego, pues es difícil para cualquier gobierno acceder a una tregua bajo cuyos términos el secuestro podría continuar, y es difícil para las guerrillas renunciar a tal fuente de ingreso. Colombia, que en el nacimiento de las FARC en los sesenta no figuraba para nada en el tráfico mundial de drogas, ni siquiera en marihuana, es ahora, de forma notoria, el mayor cultivador de coca -habiendo reemplazado a Bolivia y a Perú en la década pasada-, productor de cocaína y un productor significativo de heroína.

Algunos de los líderes de las FARC tienen mayores ambiciones militares, y hablan de poner un ejército de 30000 hombres y de librar una guerra de movimientos y posiciones en una escala mucho más grande. En realidad, las FARC continúan reclutando y armándose: hay un gran excedente de armas en Centroamérica y tienen relaciones comerciales armoniosas, mediante las cuales pueden intercambiar drogas por armas con la mafia rusa.

Por lo regular, las guerrillas, a diferencia de los ejércitos regulares, ven las treguas y los ceses al fuego como una molestia; las diferencias de opinión se vuelven más visibles y generan sospecha mutua. La paz plantea diversas perspectivas para distintos tipos de líder: cualquiera demasiado entusiasta por ella, será visible y vulnerable. En años recientes en Colombia la amenaza más grande para las vidas de los guerrilleros que se han reinsertado en la sociedad -esfuerzos anteriores de paz han producido miles de ellos- han sido guerrilleros que no se han reinsertado. Todo esto hace que las guerrillas sean conservadoras, muy dadas a la rutina. Los líderes del FMLN de El Salvador, comprometidos en un guerra civil más definida y mucho más ágiles en lo político, consideraban aletargadas a las FARC.

¿Y qué decir de los paramilitares? Se dice que son al menos cinco mil, y en

rápida expansión en la atmósfera de incertidumbre y frustración que ha resultado de dos años de conversaciones de paz con las guerrillas (las que a pesar de las grandes concesiones del Gobierno han tenido muy poco progreso). El gobierno colombiano enfrenta un problema que debe ser familiar para los lectores irlandeses y británicos: muchas concesiones de un lado, producen reacciones poco amantes de la paz del otro. Los paramilitares han surgido de la exasperación local con los excesos de la guerrilla -los patrones locales varían, pero es difícil decir desde la distancia quién le está haciendo qué a quién y por qué. Tienen algunos promotores ricos y está tan interesados como las FARC en el tráfico de drogas. Dicen que sus métodos son un espejo de aquellos de las guerrillas: su especialidad es la masacre de aquellos sospechosos de simpatizar con la guerrilla; sus métodos repiten los de las contra guerrillas de los cincuenta. En sus filas hay muchos antiguos guerrilleros: el trabajo es muy parecido, y es probable que paguen mejor.

Por su parte las guerrillas insisten en que los paramilitares son una creación del Ejército: hace un par de años las FARC, que no se distinguen por su sentido del humor, se quejaron de que eran “ilegales”. Fuertes medidas del gobierno contra los paramilitares ha sido una de las condiciones para las conversaciones de paz por parte de las FARC desde el comienzo de la ronda actual de ellas, y una reunión entre el Ministro del Interior y el líder paramilitar Carlos Castaño, hecha por motivos humanitarios y para liberar algunos políticos muy convenientemente secuestrados, fue la razón por la que las FARC suspendieron las negociaciones a mediados de noviembre (fueron reanudadas a mediados de febrero).

Todo esto me lleva hasta el Ejército colombiano y la pregunta acerca de si respeta o no los derechos humanos. Inevitablemente ha habido colusión entre un número de unidades del Ejército y los paramilitares, alentada por la falta de algún tipo de estrategia liderada por los civiles, dos décadas de vacilación buscando la paz en forma intermitente y con mediocres relaciones entre los civiles y los militares. La propaganda de la guerrilla, en especial la hecha para el consumo externo, ha puesto mucho énfasis en estas conexiones entre el Ejército y los paramilitares y esta es una de las razones por las que hay oposición a la ayuda militar a Colombia en los Estados Unidos, en donde la ley Leahy prohíbe ayudar a unidades militares con un pasado cuestionable en materia de derechos humanos. Sin embargo, los paramilitares tienen vida propia y su líder, Carlos Castaño, concede las mejores entrevistas de televisión. (Prácticamente todo el mundo da entrevistas en Colombia, en la ciudad y fuera de ella, en la cárcel y fuera de ella; no hay ninguna Thatcher que insista en voces superpuestas y no hay censura.) Las estadísticas convencionales, producidas por el gobierno y las ONGs atribuyen la violación de los derechos humanos a los paramilitares, la guerrilla, las Fuerzas Armadas y la Policía, en ese orden.

Colombia nunca ha sido una sociedad militarista. El jactarse de que en 170 años de existencia independiente ha habido menos de diez años de dominio militar está basado en la verdad. El Ejército tradicionalmente defiende la Constitución; el disgusto de los soldados con las negociaciones de paz del gobierno se expresan a

menudo como una crítica al presidente por no ceñirse a la Constitución y a la ley al dejarle a las guerrillas control virtual de partes del país -Colombia es a la vez tan legalista como falta de ley. La resistencia del Ejército a la política del Gobierno se expresa más en un ir lento, o en amenazas de renuncia, que en conspiraciones y mucho menos en un golpe. La carrera militar ofrece más servidumbre que grandeza, y uno puede admirar a los soldados veteranos, incluido el actual comandante en jefe, el general Fernando Tapias, por su habilidad para mantener un tono moderado en circunstancias muy difíciles. Lo mismo puede decirse de la Policía, el blanco más fácil para el asesinato o para intentos de corrupción, “el objetivo elegido” como dice la frase, de las guerrillas.

Ni el Ejército ni la policía son lo suficientemente fuertes o eficientes para lidiar con los problemas que ahora enfrentan. Colombia es un país al que han gobernado tradicionalmente con mano suave y que no será capaz de superar sus actuales dificultades sin un aparato estatal más fuerte. No hay alternativas ni de la sociedad civil ni de las ONG's, y ningún pacto entre las partes en conflicto reducirá la necesidad de ese estado más fuerte. Los colombianos conciben a la “sociedad civil”, una frase que han usado hasta convertirla en hilachas, como un conjunto de organizaciones e instituciones que, al menos en sus orígenes, no tienen nada que ver con el gobierno o con el oficialismo; esto lo convierten con facilidad en una declaración de virtud superior y lucidez. Tienden menos a reconocer que una sociedad civil depende de la existencia de un estado fuerte, que es el único que puede proveer un sistema de justicia efectivo y las fuerzas del orden necesarias. Estas últimas no pueden garantizar un mayor respeto por los derechos humanos, pero con ellas hay alguna perspectiva de mejoramiento y sin ellas no hay esperanza alguna. En últimas, lo que disuade a los paramilitares y las guerrillas es la fuerza militar.

Lo anterior me conduce a uno de los dilemas de la actual política de los Estados Unidos: ¿deberían los Estados Unidos apoyar al gobierno colombiano con ayuda militar? ¿Debería enviar helicópteros y librar una guerra abierta contra la coca?

Criticar la política de los Estados Unidos para Latinoamérica es tan europeo como la tartin tatin (en francés en el original, et.). La reacción más común al Plan Colombia, que es en lo que ha evolucionado la idea original del presidente Pastrana de un Plan Marshall para ayudar a su país en las presentes dificultades, es favorecer una suma muy reducida de ayuda humanitaria -ni riesgo de una valiente Eurofuerza desplegándose allá rápidamente- mientras expresan grados diversos de escepticismo y desaprobación acerca del elemento militar, que conforma la parte más sustancial de los 1.3 billones de dólares con los que Estados Unidos se ha comprometido. (Honor cuando el honor se debe: la mejor amiga de Colombia en Europa fue la Sra. Thatcher, quien le dio asistencia efectiva al presidente Virgilio Barco en el momento de su confrontación con el líder del cartel de la droga, Pablo Escobar y, quizás fue la única de los primeros ministros en leer de verdad los despachos enviados desde Bogotá.)

El Plan también tiene muchos críticos en los Estados Unidos. Sus alegatos fueron resumidos recientemente por Mark Danner en la *New York Review of Books*. Su lista: las exageraciones y errores de la guerra contra las drogas, la falta de franqueza como un eco de lo ocurrido en Vietnam y Centroamérica (el Congreso, argumentó, nunca aprobaría ayuda para el gobierno colombiano sólo para combatir las guerrillas), la insuficiencia del esfuerzo doméstico anti-drogas de los Estados Unidos. Además de lo cual, alguna vez Colombia fue descrita como el tercer recipiente más grande de ayuda militar de los Estados Unidos, después de Israel y Egipto.

Este último argumento es débil. El mundo de hoy no contiene muchos recipientes de ayuda militar de los Estados Unidos, y lo que se le ofrece a Colombia no es mucho en términos militares. El costo, los lectores británicos pueden calcularlo, es más bien menor que el del Millenium Dome, no mucho para ser gastado en una tontería militar más que en una civil. Ayuda de este nivel está en verdad muy lejos en proveer siquiera la ilusión de una solución militar para los problemas de Colombia. Los helicópteros militares son muy caros: un Black Hawk, y sólo se han prometido quince, cuesta entre diez y quince millones dólares. Uno ya fue derribado por las FARC.

Danner también facilitó los “bosquejos para una política más inteligente”. Estos incluirían “construir las instituciones del gobierno de Colombia con la ayuda extranjera; fortaleciendo la economía legítima del país mediante la inversión extranjera y disminuyendo las barreras que mantienen sus productos fuera de los mercados de los Estados Unidos, lanzando una seria, sostenida campaña diplomática (como los esfuerzos americanos en el Medio Oriente y en Irlanda) para llevar la “guerra civil” colombiana a una solución negociada; e incrementando fuertemente el dinero gastado en los Estados Unidos en la reducción del consumo de drogas ilegales: todo lo cual suena más como un actitud que como una política. Entre las instituciones por construir no están incluidas las Fuerzas Armadas: el alegato de Danner no reconoce las décadas de esfuerzo de la policía y el ejército que ayudaron a producir la actual paz en Ulster. Sus propuestas también ignoran la proporción en que la inversión, y la economía en general, dependen del orden público más que de cualquier “ánimo” o “apoyo”: la falta de acceso al mercado de los Estados Unidos no es un problema crítico. Mientras tanto, la naturaleza de la “seria y sostenida” campaña diplomática que repetiría los éxitos del Norte de Irlanda y de Medio Oriente es dejada en blanco. Danner, simplemente, no está la altura de lo prometido.

Colombia necesita ayuda militar: ¿por qué no habría de recibir ayuda de los Estados Unidos un gobierno sitiado? La pregunta puede parecer poco sofisticada, pero la sofisticación no es siempre la mejor respuesta, pues como decía Disraeli: “Cuando tu casa está ardiendo... envía por la máquina de bomberos de la parroquia”. La ayuda necesitada puede que no sea exactamente la contenida en el Plan Colombia, pero no es posible ni deseable que el gobierno democráticamente elegido de

Colombia no haga nada con respecto a las guerrillas, los paramilitares, la coca o la amapola. Sus enemigos no se están sentados en sus manos, y hay obvias y muy viejas razones por las que las FARC deberían denunciar la asistencia militar como una intervención militarista que amenaza la paz; ellos no son espectadores neutrales, y no tienen la intención de entregar sus armas a cambio de programas de desarrollo alternativo o de ayuda humanitaria. Colombia tiene el derecho de reclamar ayuda militar tanto de Europa como de Estados Unidos, pues Europa, también, es un gran consumidor de drogas. Aunque los colombianos lo repiten demasiado a menudo, es cierto que su país ha sufrido más que cualquier otro país a causa del narcotráfico. Más que cualquier otro factor es responsable del muy alto nivel de homicidios y de la corrupción: y cualesquiera que sean las dudosas ganancias económicas que alguna vez trajo —el tráfico de drogas siempre tuvo muchos efectos negativos— hoy están desapareciendo.

Entonces, ¿deberíamos, como en la frase de Edward Lutwak, “darle una oportunidad a la guerra”? Esto no implica ninguna solución militar final, sino más bien mantener la línea, de hecho una tarea bien difícil, e incrementar la presión sobre las guerrillas para que alcancen una visión más realista de sus perspectivas, y lleguen a un acuerdo.

Esta política tiene muchos riesgos. Una estrategia concebida con el fin de atacar la fuente de las drogas en el Putumayo y en el sur este del país corre el riesgo de lanzar a la población —mucho de ella migrante: estos no son nuestros tradicionales campesinos cultivadores de coca— a los brazos de las FARC. El Ejército todavía no está en capacidad de controlar el territorio, y un plan así estaría sujeto a la crítica de que está dominado por preocupaciones de los Estados Unidos y no de Colombia. Muchos colombianos no son anti-americanos. Clinton fue recibido tan calurosamente en Cartagena el verano pasado como alguna vez lo fuera en Belfast, y alcanzó un 79% de popularidad en la inevitable encuesta de opinión; pero las actitudes pueden cambiar. La necesidad política, en los Estados Unidos, de presentar la ayuda como anti-narcóticos, no anti-guerrilla, y dirigida a la creación de tres batallones especiales, comprometidos en el respeto a los derechos humanos, de acuerdo a la ley Leahy, corre el riesgo de crear un ejército dividido en dos clases y de distorsionar el esfuerzo militar. Tampoco la ayuda es gratuita: requiere de contrapartidas del Gobierno.

Alfredo Rangel, el más importante comentarista militar del país, ha dicho recientemente que los colombianos tienen que reconocer la magnitud de los problemas que enfrentan y cuánto va a costar su solución; ninguna ayuda externa va proveer la solución sin ese reconocimiento y sin mejorar la estrategia nacional. La ayuda puede ser adictiva y debilitante. Ahora viene el asunto de los derechos humanos. Paradójicamente, la mejor oportunidad de mejoría radica en la combinación de ayuda militar de los Estados Unidos y de oposición doméstica a ella en los Estados Unidos. La administración Clinton presionó a Bogotá para que desmantelara las unidades culpables y llevara a juicio, o al menos diera de baja, a

los oficiales y soldados involucrados. Esto ha tenido sus efectos, aún bajo la presidencia de Samper, cuando la política de los Estados Unidos profesó escepticismo acerca de la “narcoguerrilla” e ignoró las necesidades del Ejército. El Gobierno de Pastrana purgó a más de cuatrocientos oficiales y de otros rangos. Pero esto solo no mejorará las cosas en su conjunto: las puede hacer incluso peores -algunos de esos cuatrocientos ya deben haberse unido a las filas de los paramilitares-. El Gobierno tendrá que realizar en el futuro acciones cuidadosamente planeadas contra esas organizaciones.

Quizás percibiendo un cambio en la brisa y aún un ligero frío en el aire, el líder paramilitar Carlos Castaño ha estado exigiendo reconocimiento para su organización, una parte en las negociaciones, y tratamiento igual al de las guerrillas por parte del gobierno. Sus discusiones con el Ministro del Interior llevaron a las FARC a suspender sus propias negociaciones -una consecuencia predecible. Su comunicado de suspensión denunciaba la debilidad de Pastrana, la política tradicional de los partidos, el imperialismo de los Estados Unidos, el Pentágono, la jerarquía católica, los latifundistas, el Congreso, el Fiscal, el Procurador, el Defensor del Pueblo, las Cortes Supremas, el neoliberalismo, las Fuerzas Armadas, las organizaciones de los productores y los medios. La confianza es escasa bajo los pies.

Pero ellos no quieren que termine la generosa zona neutral, la “zona de despeje”. Todo va a durar mucho tiempo.